

*ARS LONGA. ACTAS DEL VIII CONGRESO
INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES
SIGLO DE ORO (JISO 2018)*

Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.)



LA CREACIÓN DEL MERCADO DE OFICIOS EN CASTILLA A TRAVÉS DE LA OBRA DE CASTILLO DE BOBADILLA*

Víctor M. Gómez Blanco
Universidad Carlos III de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

«Comencé a gobernar el año de 1543»¹

En marzo de 1543, Carlos V volvía a abandonar España para encargarse de manera directa de las campañas militares que se estaban desarrollando en los Países Bajos. Esta partida sería muy diferente a otras, ya que, además de ser la más prolongada, dejaba como regente a su hijo Felipe que acababa de cumplir dieciséis años. Como más tarde reconoció Felipe II, él no comenzó a gobernar con la abdicación de su padre en 1556, sino trece años antes.

La situación económica que se encontró el príncipe Felipe era complicada. El encabezamiento se había firmado con las ciudades con voto en Cortes en 1537. Pese a que este nuevo sistema debía suponer un incremento de los recursos, al evitarse los costes de intermediación

* El proyecto que ha generado estos resultados ha contado con el apoyo de una beca de la Fundación Bancaria "la Caixa" (ID 100010434), cuyo código es LCF/BQ/ES16/11570007.

¹ Felipe II, nota del rey, 28/12/1574 (Kamen, 1997, p. 14).

Publicado en: Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), *«Ars longa». Actas del VIII Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2018)*, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2019, pp. 151-163. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 50 / Publicaciones Digitales del GRISO. ISBN: 978-84-8081-637-3.

que generaban los arrendamientos de tercias y alcabalas, como las cuantías a pagar por las ciudades fijadas en el contrato no se actualizaron hasta 1575-1577², la elevada inflación del siglo XVI acabó generando una reducción en términos reales de los recursos fiscales con los que contaba la Corona.

Para poder hacer frente a los ingentes gastos militares, las opciones que tenía Castilla eran varias, pero todas ellas se fueron agotando. La emisión de juros tenía como límite las rentas corrientes de la hacienda³, los recursos de tierras baldías y territorios de las órdenes cada vez eran más escasos, los ingresos de Indias, pese a empezar aumentar exponencialmente al final de esta década⁴, estaban en gran parte comprometidos, y los servicios contaban con la dificultad de tener que ser negociados con el Reino en las Cortes. Por ello, era realmente necesario para el príncipe conseguir nuevas fuentes de financiación, y la venalidad de oficios sería uno de los arbitrios clave.

2. EL MERCADO DE OFICIOS ANTES DE FELIPE II

En Castilla, la historiografía ha señalado la existencia de ventas de oficios desde la Baja Edad Media⁵. Durante esta época, los reyes generalmente entregaban los cargos públicos de las ciudades y villas grandes como merced —gratuita— y habitualmente de manera vitalicia, mientras que en las pequeñas los oficios solían ser añales y elegidos por suertes o por votación. Paralelamente se generó un mercado privado de ventas entre particulares gracias a la figura canónica *resignatio in favorem* que fue introducida en Castilla por Juan II⁶. Dichas ventas o renunciaciones por precio se realizaban entre particulares, por lo que la hacienda real no se beneficiaba económicamente de ellas.

Estas prácticas acabaron generando un gran debate tanto moral como político⁷. Las quejas de los procuradores en las Cortes de Juan II y Enrique IV fueron recurrentes. En respuesta, Juan II en 1428 decretó que se fuesen consumiendo (eliminando) todos los oficios

² Tomas y Valiente, 1999, pp. 92-99.

³ Álvarez Nogal y Chamley, 2014.

⁴ Hamilton, 1934.

⁵ Domínguez Ortiz, 1985, p. 149; Fortea Pérez, 2017, p. 356.

⁶ Tomas y Valiente, 1982, p. 37.

⁷ Para profundizar sobre el debate moral y político ver Fortea Pérez, 2017.

que fuesen vacando por renunciación, muerte del titular u otra razón, hasta llegar al número antiguo⁸. Decretos idénticos al anterior fueron nuevamente publicados en 1432, 1433, 1435, 1447 y, ya bajo el reinado de Enrique IV (1454-1474), en 1469 y 1473⁹. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los Reyes Católicos al poder que se consiguió atajar con efectividad este problema.

Isabel I aumentó la legislación en materia de renunciaciones y veló por el cumplimiento de la misma. Las leyes más relevantes fueron la ley 62 y la 84 de las Cortes de Toledo (1480) a través de las cuales se obligaba a que un renunciante viviera al menos 20 días tras hacer la renuncia para que fuese válida y revocaban todos los oficios por juro de heredad, que se habían empezado a otorgar durante el reinado de Enrique IV, prohibiendo totalmente su enajenación en el futuro por parte de la Corona. También fue muy importante la pragmática del 20 de diciembre de 1494 por la que se prohibían tajantemente las ventas de oficios obligando a los titulares a jurar que no lo habían obtenido por precio directo ni indirectamente. Por último, la pragmática del 24 de septiembre de 1501 obligaba a que en un plazo menor a 60 días un oficio que hubiese sido renunciado fuese reclamado por su nuevo titular. Pese a que eliminar plenamente las ventas ocultas de oficios era imposible, toda esta legislación resultó efectiva y las quejas en las Cortes desaparecieron en los años posteriores.

Durante los primeros años del reinado de Carlos V (1516-1556) se produjo una pequeña vuelta al pasado. Aunque no se revocó ninguna de las pragmáticas de los Reyes Católicos, el cumplimiento de las mismas no fue tan exhaustivo y la patrimonialización y las ventas de los cargos públicos volvieron a aumentar. En esta ocasión no ocurrió solo en Castilla sino también en Indias¹⁰. Una de las pocas políticas destacables en este periodo fue la prohibición de que los extranjeros pudieran recibir oficios reales castellanos¹¹.

En 1543, con la llegada de Felipe al gobierno, se produjo un gran cambio a partir del cual los oficios se convertirían en una pieza clave

⁸ El número antiguo de regidores o veinticuatro difería en cada ciudad o villa. En las grandes ciudades del norte solían ser 16. Mientras que en las del sur solían ser 24. En las villas más pequeñas era menor —entre 2 y 8 regidores; ver Andújar y Felices de la Fuente (eds.), 2011, pp. 90-100.

⁹ Fortea Pérez, 2017, p. 357.

¹⁰ Tomás y Valiente, 1982.

¹¹ Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos de Castilla (DIV), leg. 2, núm. 8.

de la financiación de la Corona. El príncipe intercalaría políticas de ventas generalizadas con otras encaminadas a la creación de un mercado privado y seguro de oficios. Con las ventas obtendría una renta directa, mientras que con la privatización y protección de los derechos de los inversores maximizaba los precios de los oficios y, por tanto, los beneficios de las ventas futuras.

3. CREACIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO DE OFICIOS

Pese a que algunos autores¹² han señalado que la decisión de vender oficios de manera generalizada la tomó Carlos V recién llegado a Castilla, ni la cronología de las ventas ni la documentación analizada parecen respaldar dicha idea.

La primera gran venta de oficios se produce a finales de 1543 cuando se emiten un conjunto de cédulas reales por las cuales el príncipe solicita a distintas ciudades —como Córdoba (cédula del 01/11/1543), Valladolid (cédula del 10/10/1543) o Burgos (cédula del 05/10/1543)— que se creen varios oficios en cada una de ellas¹³. Por norma general se crearon tres regimientos, aunque este número varió en función de la ciudad. Por ejemplo, en Zamora solo fueron dos, mientras que, en Granada, además de las tres veinticuátrías, también se crearon tres juradurías y otras tantas escribanías.

Con el éxito recaudatorio por dichas ventas, sino antes, Felipe comprendió que la venalidad podía ser una importante fuente de financiación, aunque no estaba exenta de problemas. Una descontrolada creación de oficios generaría duras críticas en las Cortes dificultando las negociaciones de nuevos servicios, también provocaría malestar entre las personas más influyentes de las ciudades y devaluaría el valor de los mismos reduciendo las rentas futuras. Por ello, el príncipe inició una serie de políticas que buscaban aumentar los precios y el número de posibles oficios vendibles a través de la privatización y la protección de los derechos de los inversores. Es posible que el propio Felipe hubiese apreciado los beneficios económicos que podían tener políticas de estabilidad que ampliasen los derechos de los inversores como la política monetaria de los Reyes Católicos fijada en 1497 —que se mantuvo sin apenas alteraciones durante un siglo— o

¹² Domínguez Ortiz, 1985, p. 109, y Cuartas Rivero, 1984, p. 497.

¹³ AGS, Cámara de Castilla (CCA), Libro de Relaciones (REL), leg. 7.

las políticas relativas a los juros que garantizaban el pago de intereses con rentas ordinarias¹⁴.

La primera gran medida, y posiblemente la más relevante, llevada a cabo para la formalización de este mercado se produjo el 15 de abril de 1545. Ese día, el príncipe envió una provisión secreta a los corregidores de un gran número de villas y ciudades de Castilla exigiéndoles que se informasen del valor que tenían los oficios en su municipio y que negociasen con los propietarios de los mismos una cuantía a pagar para que estos pudiesen así renunciarlos libremente sin necesidad de cumplir las leyes vigentes¹⁵. La cantidad a pagar por la venta de esta facultad, especificaba el monarca, no podría ser inferior a una cuarta parte del valor estimado del oficio. Esta provisión es de suma relevancia, ya que, además de reflejar que era públicamente conocido que los oficios se vendían, permitía por primera vez que las restricciones y controles sobre las renunciaciones de oficios se pudiesen saltar, es decir, convertía los oficios en algo legalmente vendible.

En 1548, el príncipe Felipe emprende un viaje por Europa que le mantendrá alejado de Castilla durante más de diez años¹⁶. En este periodo, la legislación en materia de oficios permanece estancada, aunque sí se produjeron acrecentamientos generalizados en los años 1549 y 1557. Estos principalmente se producían en momentos en que la hacienda real necesitaba consignar ciertos gastos y otras vías de financiación estaban prácticamente cerradas. Prueba de ello es la consulta que elevó el Consejo de Hacienda el 19 de febrero de 1549 —antes de los acrecentamientos de ese mismo año— donde se explicaba al príncipe que para cubrir un millón de ducados de gastos de la Corona y ejército solo había 132.000 ducados consignados, y que era necesario hacer algún arbitrio. Concretamente, aconsejaron el acrecentamiento de oficios por ser menos dañino que otras alternativas y «porque no hay juros que vender y lo de las órdenes hay pocos que lo compren»¹⁷.

Felipe II, ya proclamado rey, volvió a Castilla en 1559. En los años posteriores fijó su objetivo en algunos empleos públicos que hasta el momento no se habían privatizado —como las procuraciones

¹⁴ Comín, 2016, p. 31.

¹⁵ AGS, CCA, DIV, leg. 47-33-1 p. 25.

¹⁶ Kamen, 1997, p. 21-80.

¹⁷ AGS, CCA, DIV, 47,5-38R.

del número que empezaron a venderse en 1562¹⁸— y en los cargos municipales de las villas pequeñas. Existen varias cédulas reales por las que hizo que los oficios de estas villas, que hasta ese momento habían sido añales, pasasen a ser «perpetuos-renunciables»¹⁹, es decir, que los propietarios pudiesen servirlos y renunciarlos cuando lo desearan, siempre que cumpliesen con las normas establecidas (ley de los 20 y 60 días). En cada una de estas cédulas justifica la decisión por el bien de la administración. Concretamente explica que los escribanos al mudarse llevaban consigo las escrituras de pleitos y las perdían (cédula de 21/12/1569) o que los regidores si son añales buscaban su propio beneficio y no tenían experiencia en los negocios del concejo (cédula de 20/07/1571)²⁰. Sin embargo, estas justificaciones no eran más que retórica. En el debate político existía unanimidad sobre las consecuencias negativas que traían los oficios perpetuos. Además, el único criterio que utilizaba la Corona para otorgar este tipo de cargos desde 1543 era el precio pagado por el comprador, lo que evidencia que las cualidades del oficial y su consiguiente buena administración no era factores a tener en cuenta.

Durante la década de 1570 se produjeron algunos cambios institucionales relevantes. Uno de los más importantes afectó a las posibilidades de consumo. Felipe II permitió, a petición de las Cortes, que pudiese existir una tercera vía para quitar un oficio a su propietario²¹. Esta se basaba en la recompra del mismo por parte de los ayuntamientos. Dicha ley obligaba a los cabildos a reembolsar el precio que el comprador había pagado por su cargo. De esta manera se garantizaba la inversión inicial en el caso de que el ayuntamiento estuviese en contra del acrecentamiento o renuncia realizada entre los particu-

¹⁸ AGS, CCA, Dirección General del Tesoro (DGT), Inven. 24, leg. 321.

¹⁹ El término que aparece en las cédulas es *perpetuo* [AGS, CCA, DGT, Inven. 24, leg. 321]. Sin embargo, prefiero utilizar este otro para poder diferenciar estos oficios que se podían perpetuar a través de sucesivas renunciaciones cumpliendo las normas prefijadas, de los oficios perpetuados por juro de heredad que aparecerán en el siglo XVII; ver Andújar y Felices de la Fuente (eds.), 2011.

²⁰ AGS, Consejo y Juntas de Hacienda (CJH), libro 350.

²¹ Hasta ese momento, los oficios solo podían consumirse en caso de delito grave que acarrease una condena de prisión, destierro o galeras o si se incumplían las leyes de los 20 y 60 días. Aunque, en este segundo supuesto, el consumo habitualmente no llegaba a practicarse, ya que el incumplimiento solía perdonarse si el nuevo propietario pagaba una cantidad de dinero a la Corona. Esta “multa” solía suponer entre el 10% y el 25% del valor del oficio.

lares, reduciéndose fuertemente el riesgo de la inversión al limitar las posibles pérdidas a los ingresos futuros que reportaría el oficio. Por otro lado, el monarca comenzó a establecer un mayor control a las transmisiones de oficios. Por ejemplo, en una cédula del 9 de agosto de 1579, el rey obligó a los procuradores antiguos de Valladolid y Granada a pedir una licencia para poder renunciar sus oficios y a pagar una cantidad para convertirlos en «perpetuos-renunciables»²², así equiparó todos los oficios de la ciudad y consiguió transparencia en un sistema de renunciaciones que era relativamente opaco.

La institución diseñada por Felipe II funcionó a la perfección cuando en 1582 se produjo otra fuerte oleada de acrecentamientos. Antes de dicha política, el rey solicitó un análisis exhaustivo de la situación del mercado. En respuesta se elaboraron unos informes por parte de los corregidores y completados posteriormente por los contadores de la razón donde se exponía la situación de los oficios municipales más relevantes (regidores/veinticuatro, jurados, escribanos, procuradores, alférez mayor y fieles ejecutores) exponiéndose el número de cargos, su precio, las últimas ventas y, en algunas ocasiones, las posibilidades de acrecentamiento²³.

Así, el mercado de oficios alcanzó cifras impactantes. Hasta el momento no existe un estudio general que permita ofrecer datos exactos del valor total que la Corona percibió por estos conceptos. Sin embargo, desde mi punto de vista, nos podemos hacer una idea de las dimensiones con los dos ejemplos siguientes. Por un lado, con el primer servicio de los 8 millones aprobado en 1590, el Reino concedió al rey la posibilidad de servirse con 2 millones de ducados a través de las ventas de oficios²⁴. Esto significaba que el mayor servicio que se habría otorgado a un rey en la historia estaría formado en un 25% de rentas extraídas de la venalidad. Por otro lado, en 1599 el procurador en Cortes por León, Hernando de Quiñones, valoró los oficios de regimientos y juradurías de ciudades con voto en Cortes en 2.293.500 ducados y de otras ciudades en 6.879.500 y las escribanías, receptorías, procuraciones, alcaidías de cárceles y demás oficios en 3.000.000²⁵, es decir, sin haber entrado en el siglo XVII —en el cual

²² AGS. CCA, Consumos y perpetuaciones, leg. 34.

²³ AGS, DGT, Inven. 24, legs. 321 y 322. Estos documentos han sido estudiados también por Marcos Martín en Andújar y Felices de la Fuente (ed.) 2011.

²⁴ AGS, CON, leg. 30.

²⁵ Andújar y Felices de la Fuente (ed.), 2011, p. 115.

se crearían gran cantidad de oficios nuevos— la estimación del valor de los cargos municipales era superior a 12 millones de ducados.

4. LAS VENTAS DE OFICIOS EN *POLÍTICA PARA CORREGIDORES Y SEÑORES DE VASALLOS*...

Una forma de poder evaluar el efecto real que tuvo la nueva legislación emprendida por Felipe II es analizar los manuales de derecho contemporáneos. Pese a la existencia de códigos legales vigentes en la época como la Nueva Recopilación (1567), la distancia entre estos códigos y la normativa realmente aplicada por los jueces ordinarios era amplia. Por ejemplo, en el apartado de las ventas de oficios, la Nueva Recopilación aún recogía la ley de los Reyes Católicos que prohibía las ventas o renunciaciones por precio (ley 17, título III, libro VII) pese a que evidentemente no era respetada ni por parte de los particulares, ni de la propia Corona.

Sin embargo, existen libros mucho más útiles para interpretar la legislación vigente en la Edad Moderna. Estos libros son manuales de derecho contemporáneos, escritos por profesionales con una dilatada experiencia jurídica, que estaban destinados a ser utilizados por los corregidores²⁶ y abogados para poder desempeñar sus funciones judiciales. Este es el caso del famoso libro *Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares* de Castillo de Bobadilla, publicado en 1597. Castillo, licenciado en cánones por Salamanca, empezó su carrera profesional como teniente letrado de Badajoz en 1568. Después fue corregidor de Soria y Guadalajara y abogado particular hasta 1592. En ese año fue nombrado letrado de Cortes, y desde 1602 hasta su muerte fue fiscal de la Audiencia de Valladolid²⁷, es decir, pasó por casi todos los niveles de la justicia castellana. El autor dedica una parte del segundo volumen de su libro a las ventas de oficios. Específicamente, dentro del libro III, capítulo VIII, titulado «De la calidad, prerrogativas, poder, jurisdicción y oficios de los regidores», existe un apartado dedicado a las ventas de regimientos²⁸.

²⁶ Los corregidores realizaban las tareas de jueces de primera instancia (Tomás y Valiente, 1999).

²⁷ Tomás y Valiente, 1999, pp. 179-227.

²⁸ Artículos que van desde el 285 al 295.

Aunque Castillo hace referencia a los oficios de regidor en determinados momentos, sus conclusiones pueden extenderse al resto de cargos, ya que todas las leyes que trata no matizan entre los distintos tipos de oficios, es decir, al tratarse de normas generales, la normativa aplicada a un tipo de oficio debe ser la misma que a otro. Es más, como el propio autor comenta, al tener los regimientos jurisdicción en casos particulares, las leyes que se les deberían aplicar son más estrictas en dichos casos. En realidad, los oficios de justicia nunca se llegaron a vender en Castilla²⁹, pero los regimientos solo tenían poder judicial en situaciones excepcionales como cuando un corregidor en beneficio propio desposeía a alguien injustamente de sus bienes o cuando el corregidor moría repentinamente³⁰.

El análisis de los apartados que van del 285 al 289 refleja fielmente la evolución del mercado de oficios en Castilla. El autor comienza explicando que los Reyes Católicos prohibieron las ventas y renunciaciones por precio, de manera que si una renuncia incumplía dicha norma debía ser invalidada. Además, añade que establecieron como obligación que el regidor jurase, antes de ser recibido en el ayuntamiento, «no haber dado por el oficio precio»³¹. Y se apoya en los clásicos para justificar dichas normas, ya que, pudiendo ser la venalidad de oficios legal, era inmoral.

En el punto 286 describe como antiguamente los títulos de oficios hacían referencia a que en la renunciación no había intervenido precio ni venta, pero que se hizo muy bien en quitar dicha parte, «como lo sería también quitar la dicha ley, que no ocupe el Libro de la Recopilación en balde, pues ya no se guarda»³². Entonces, Castillo de Bobadilla señala que esto ha ocurrido «por culpa de los tiempos, [...] y por ventura y también por culpa de los ingenios y por las grandes obligaciones y necesidades de su Majestad»³³. Sin duda, está detallando que, aun existiendo las viejas leyes que prohíben las ventas de oficios, estas han quedado en desuso por las necesidades económicas, particularmente las de la Corona, que han obligado al rey a emprender la venta de cargos.

²⁹ Tomás y Valiente, 1999, pp. 162-165.

³⁰ El autor analiza las situaciones especiales en las que los regidores tienen jurisdicción en los apartados anteriores del mismo capítulo.

³¹ Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 230.

³² Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 231.

³³ Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 231.

El resumen perfecto de la situación jurídica que se aplica a estos activos lo muestra el punto 288 donde se explica que los oficios son «vendibles y ejecutables, pudiéndose apremiar por prisión a los deudores [que no los pagaren]»³⁴. Es decir, además de ser legal la venta de oficios, se les aplicaba la estricta legislación ejecutiva del momento que se basaba en que si un deudor no pagaba las cuotas del censo acordado en la venta, el acreedor podría solicitar la ejecución de los bienes hipotecados, lo que implicaba el embargo del oficio y, además, el deudor podría ser condenado a prisión durante treinta días, perder el resto de sus activos para ser subastados y con la suma recaudada redimir la deuda, e incluso tener que servir a los acreedores con su trabajo hasta cubrir el impago si con la subasta no se había conseguido³⁵.

A continuación, en el mismo punto explica que los oficios pueden darse en dote y arras o dejarse como herencia a un hijo, además de poderse hipotecar³⁶. En definitiva, los cargos municipales se habían convertido en un bien raíz más como podía ser la tierra. Por último, termina expresando que, partiendo del hecho que las renunciaciones no suelen ser gratuitas y del conocimiento que el monarca tiene de ello, el verdadero entendimiento que se debe hacer de la ley es que las ventas de oficios no se podrán hacer excepto si el rey ha vendido ya ese oficio con anterioridad. Es decir, aquellos cargos que por costumbre nunca han sido vendidos, como por ejemplo los de justicia, deben cumplir las leyes que prohíben su venta. Por el contrario, aquellos que fueron vendidos en su día por el monarca pueden ser traspasados legalmente por sus posteriores propietarios. Podríamos decir que el rey sentó jurisprudencia a través de sus ventas.

A partir del punto 290, Castillo de Bobadilla empieza a analizar situaciones particulares que pueden afectar a los derechos de los propietarios de oficios. Concretamente, los artículos 290 y 291 desarrollan las normas que deben aplicarse en las herencias entre las cuales están: que debe tenerse en cuenta el precio del oficio en el día de la muerte del poseedor para hacer la partición, y, en caso de que el oficio no sea vendible, el heredero efectivo debe compensar al resto

³⁴ Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 231.

³⁵ Porras Arboledas, 2013, pp. 242-245.

³⁶ Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 232.

de sucesores³⁷. Por último, los artículos 292 y 293 destacan de nuevo que los cargos municipales poseen las mismas propiedades que el resto de bienes raíces. Como, por ejemplo, el derecho a tanteo y retrato o que puede imponerse sobre los mismos censos redimibles con el límite máximo del salario anual que tiene el cargo.

5. CONCLUSIONES

La venalidad de oficios en Castilla ha sido brillantemente estudiada por diversos historiadores que han enfatizado aspectos como la corrupción³⁸, los modelos contractuales³⁹, la promoción social⁴⁰, la evolución de las ventas en periodos determinados⁴¹ y los debates morales⁴². Con todo, es un tema tan complejo que posee muchos espacios aún por rellenar y, desde mi humilde punto de vista, la formación del mercado “legal” de oficios y su estudio con un enfoque estrictamente financiero son dos de ellos.

Este trabajo ha intentado dar una explicación de cómo un mercado “negro” de cargos públicos se convirtió en un mercado transparente y seguro gracias a la legislación creada por Felipe II. Estos cambios institucionales pueden ser apreciados a través de uno de los libros de derecho más conocidos de la época como fue *Política para corregidores y señores de vasallos...* El autor de dicho libro, Castillo de Bobadilla, con una amplia experiencia en el sector judicial, concluye que, en contra de lo que recoge la Nueva Recopilación (1567), los oficios son *de facto* legalmente vendibles y poseen las mismas características que el resto de bienes raíces.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, y CHAMLEY, Christophe, «Debt Policy under Constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese Bankers», *The Economic History Review*, 67.1, 2014, pp. 192-213.

³⁷ Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, II, p. 232.

³⁸ Ponce y Andújar, 2016.

³⁹ Andújar y Felices de la Fuente (eds.), 2011.

⁴⁰ Hernández Benítez, 2004.

⁴¹ Marcos Martín, 2007.

⁴² Fortea Pérez, 2016.

- ANDÚJAR, Francisco, y FELICES DE LA FUENTE, María (eds.), *El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.
- CASTILLO DE BOBADILLA, Jacinto, *Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares*, en Madrid, por Luis Sánchez, 1597; Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1775.
- COMÍN COMÍN, Francisco, *Las crisis de la deuda soberana en España (1500-2015)*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.
- CUARTAS RIVERO, Margarita, «La venta de oficios públicos en Castilla-León en el siglo XVI», *Hispania. Revista española de historia*, 44, 158, 1984, pp. 495-516.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», *Anuario de Historia Económica y Social*, 3, 1970, pp. 105-137.
- FORTEA PÉREZ, José Ignacio, «El debate en torno a la venta de oficios concejiles en Castilla bajo los Austrias (1601-1630): algunas reflexiones», en *Estudios en Historia Moderna desde una visión Atlántica. Libro homenaje a la trayectoria de la profesora María Inés Carzolio*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2017, pp. 350-375.
- HAMILTON, Earl, *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650*, New York, Octagon Books, 1934. Hay versión española: *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*, trad. de Ángel Abad, Barcelona, Ariel, 1975.
- HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, «Ayuntamientos urbanos, trampolines sociales. Reflexiones sobre las oligarquías locales en la Castilla moderna», *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 34, 2, 2004 (monográfico dedicado a: *Corona española y magistraturas urbanas en la Época moderna*), pp. 91-114.
- JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio, «Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión», *Cuadernos de Historia Moderna*, 37, 2012, pp. 259-272.
- KAMEN, Henry, *Felipe de España*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1997.
- MARCOS MARTÍN, Alberto, «Enajenaciones por precio del patrimonio regio en los siglos XVI y XVII. Balance historiográfico y perspectivas de análisis», en Domingo L. González Lopo y Roberto Javier López López (eds.), *Balance de la historiografía modernista: 1973-2001. Actas del VI Coloquio de Metodología Histórica Aplicada (Homenaje al profesor Antonio Eiras Roel)*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 419-443.
- MARCOS MARTÍN, Alberto, «Las ventas de oficios en tiempos de suspensión de ventas de oficios», *Chronica nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, 33, 2007, pp. 13-35.

- PONCE, Pilar, y ANDÚJAR, Francisco (ed.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Siglos XVII y XVIII*, Valencia, Albatros Ediciones, 2016.
- PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «Procesos ejecutivos en la España castellana durante la Edad Moderna», *Cuadernos de Historia del Derecho*, 20, 2013, pp. 235-273.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «Castillo de Bobadilla (c. 1547-c. 1605). Semblanza personal y profesional de un juez del Antiguo Régimen», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 45, 1975, pp. 159-232.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Editorial, 1999.